



Expediente Tribunal Administrativo del Deporte 147/2025

En Madrid, a 16 de mayo de 2025 se reúne el Tribunal Administrativo del Deporte para conocer y resolver la solicitud de medida cautelar de suspensión formulada por D. XXX en nombre y representación del Club XXX frente a la Resolución del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol de 16 de mayo de 2025, que ratificó la Resolución del Comité de Disciplina de 13 de mayo de 2025 que sancionó al jugador D. XXX por un periodo de 2 partidos por la comisión de la infracción del artículo 130.2 del Código Disciplinario (violencia en el juego), y con multa accesoria en la cuantía de 1.000 €, en aplicación al artículo 52 del mismo Código.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 16 de mayo de 2025 se ha recibido en el Tribunal Administrativo del Deporte escrito presentado D. XXX en nombre y representación del Club XXX frente a la Resolución del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol de 16 de mayo que ratificó la Resolución de Comité de Disciplina de sancionar al jugador D. XXX por un periodo de 2 partidos por la comisión de la infracción del artículo 130.2 del Código Disciplinario (violencia en el juego), y con multa accesoria en la cuantía de 1.000 €, en aplicación al artículo 52 del mismo Código.

Por lo que respecta al presente recurso, el acta arbitral recoge lo siguiente:

« **PRIMERO.** En el acta del partido correspondiente a la 39ª jornada del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División, disputado el 11 de mayo de 2025 entre los equipos XXX y XXX, en las instalaciones deportivas del primero, el árbitro reflejó bajo el apartado relativo a las expulsiones, y en lo que al presente recurso interesa, los siguientes particulares:

“B.- **EXPULSIONES**

- XXX: En el minuto 90+7 el jugador (11) XXX fue expulsado por el siguiente motivo: Ser culpable de conducta violenta, impactando con su brazo en el rostro de un adversario, sin estar el balón en disputa.”

SEGUNDO. Después de exponer lo que considera conveniente en defensa de su derecho el recurrente solicita de este Tribunal Administrativo del Deporte la suspensión cautelar de la sanción impuesta por existir error material manifiesto conforme al artículo 27.3 del Código Disciplinario de la RFEF



FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El Tribunal Administrativo del Deporte es competente para conocer de las solicitudes de suspensión con arreglo a lo establecido en el artículo 120 y la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, en concordancia con lo previsto en el artículo 84.1 a) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y en los artículos 6.2 c) y f), y 52.2 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva, así como en el artículo 1.a) del Real Decreto 53/2014, de 31 de enero, por el que se desarrolla la composición, organización y funciones del Tribunal Administrativo del Deporte.

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, las sanciones impuestas a través del correspondiente expediente disciplinario serán inmediatamente ejecutivas sin que las reclamaciones y recursos que procedan contra las mismas paralicen o suspendan su ejecución, todo ello sin perjuicio de las facultades que corresponden a los órganos disciplinarios de las distintas instancias de adoptar, a instancia de parte, las medidas cautelares que estime oportunas para el aseguramiento de la resolución que, en su día, se adopte.

Como señala el Tribunal Supremo, en su Auto de 12 de julio de 2000, la adopción de medidas cautelares durante la sustanciación del proceso forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 CE. En este precepto tiene su engarce y dimensión constitucional la llamada justicia cautelar, porque la potestad jurisdiccional no se agota en la declaración del derecho, sino que se consume en la consecución del derecho declarado, lo que presupone la facultad de adoptar las medidas o garantías precisas a fin de preservar la eficacia de lo resuelto.

A la vista de estas consideraciones, para la resolución de la medida cautelar solicitada es necesario examinar la concurrencia del primer requisito que exige la jurisprudencia, esto es, el llamado *periculum in mora*, que concurre cuando la inmediata ejecución del acto impugnado haría perder su finalidad y sentido al recurso, por consolidar una situación fáctica irreparable o por ocasionar perjuicios de muy difícil enmienda. Este requisito ha de ser invocado y probado por la parte recurrente que pretende la paralización de dichas actividades, no bastando meras alegaciones o simples indicios, sino que es necesaria una prueba cumplida de los daños y perjuicios invocados (Auto del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1997).

Debe precisarse, conforme a la jurisprudencia, que el requisito de *periculum in mora* consiste en el peligro de un daño jurídico urgente y marginal derivado del retraso de la resolución definitiva. Es necesario que el solicitante justifique el *periculum*, es decir, que se acredite que en el caso concreto puedan producirse daños de imposible o difícil reparación durante la pendencia del proceso. De modo que “(...) *la existencia del peligro de mora, requisito esencial para la adopción de la medida cautelar solicitada, se configura con un carácter objetivo, como una probabilidad concreta de peligro para la efectividad de la resolución que se dicte, no en términos subjetivistas de creencia o temor del solicitante en la existencia del peligro*” (Auto del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2002).

En este sentido, es reiterada jurisprudencia (entre otros muchos, Auto del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1997) la que señala que el llamado *periculum in mora* concurre cuando la inmediata ejecución del acto impugnado haría perder su finalidad y sentido al recurso, por consolidar una situación fáctica irreparable o por ocasionar perjuicios de muy difícil enmienda, como se ha dicho. De tal manera que este requisito ha de ser invocado y probado por la parte recurrente que pretende la paralización de dichas actividades, no bastando meras alegaciones o simples indicios, sino que es necesaria una prueba cumplida de los daños y perjuicios invocados.

En aplicación de esta doctrina, únicamente podrá acordarse la adopción de la medida cautelar de suspensión de la resolución si el recurrente justifica los presupuestos legales habilitantes para ello, cuestión que no se cumple en el presente supuesto en lo que respecta al requisito de la justificación del *periculum in mora*. En efecto, el club recurrente alega en tal sentido que la inmediata ejecución de la sanción «generaría un perjuicio grave y de muy difícil o imposible reparación» y ello porque: el jugador sancionado es el máximo goleador del XXX, que el club se encuentra en puestos de descenso a falta de tres jornadas por lo que el citado jugador es determinante para el equipo y además en la posición del sancionado existen varios delanteros lesionados del club con lo que su suspensión es más determinante todavía. Ciertamente, la imposibilidad de disputar el partido es la consecuencia inmediata de la sanción de suspensión impuesta, siendo así que dicha consecuencia no puede convertirse, por sí sola, en el requisito de *periculum in mora* requerido por la referencia jurisprudencia. Dicho de otro modo, la presencia del jugador en el citado encuentro y su importancia en el juego del club no pueden erigirse en causa que determine la suspensión cautelar de la sanción impuesta

TERCERO. Junto a la concurrencia del anterior requisito, la concesión de la suspensión cautelar requiere también el presupuesto de la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*). Desde esta perspectiva, el fundamento del recurso, y por ende de la medida cautelar, radica en la alegación de error material manifiesto.

Así las cosas, siguiendo una consolidada línea jurisprudencial, ha de decirse que el *periculum in mora* constituye el primer criterio a considerar para la adopción de la medida cautelar también es cierto que en modo alguno es el único, «(...) ya que debe adoptarse ponderando las circunstancias del caso, según la justificación ofrecida en el momento de solicitar la medida cautelar, en relación con los distintos criterios que deben ser tomados en consideración (...) y teniendo en cuenta la finalidad de la medida cautelar y su fundamento constitucional» (STS de 24 de marzo de 2017).

Aduce a este respecto el dicente los siguientes argumentos que pasamos, a reproducir,

«Una vez abordado el requisito del periculum in mora, resulta oportuno analizar la ponderación de intereses, pues es conocido por esta parte que el interés legítimo del recurrente debe ser valorado frente al eventual interés general en la ejecución inmediata de la sanción. A este respecto, el Auto 44/2022 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de la Audiencia Nacional reitera que en el ámbito disciplinario deportivo no debe sacrificarse el interés general salvo que concurran circunstancias extraordinarias debidamente acreditadas.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, la medida cautelar solicitada no compromete el interés general, ni el principio de ejemplaridad de la sanción, por cuanto:

Se trata de un episodio puntual y discutido, cuya ilicitud ha sido fundadamente cuestionada por esta parte.

La suspensión se solicita sobre la base de elementos objetivos y determinantes que permiten apreciar la existencia de un error material manifiesto en el acta arbitral, conforme al artículo 27 del Código Disciplinario de la RFEF.

Se han aportado pruebas videográficas que corroboran que el colegiado presencié en el terreno de juego una acción distinta de la realmente producida, y que la tipificación reflejada en el acta no se corresponde con los hechos efectivamente acaecidos. »..

Así las cosas, no debe desconocerse que, como se significara en nuestra Resolución 4/2023 TAD,

«(...) el Auto 44/2022 dictado por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 de la Audiencia Nacional, de 18 de agosto de 2022, en un supuesto similar de solicitud de adopción de medida cautelarísima frente a resolución de este Tribunal, vino a declarar que,

TERCERO.- Pasando en consecuencia al análisis de los requisitos para la adopción de la medida cautelar solicitada, el artículo 130 de la citada Ley establece:

“Artículo 130.

1. Previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso.

2. La medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada.”

En consecuencia, este precepto establece un criterio de interpretación restrictiva en virtud de la cual el ejercicio de la facultad de decisión cautelar tiene que venir justificado por la imposibilidad de tutelar de otra manera la finalidad del proceso, configurando así la medida cautelar con una estructura finalista; cuya denegación, si se pone en peligro la finalidad tuitiva del proceso, sólo podría acordarse en casos de conflicto máximo, esto es, cuando de aquella pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero.

Constante y pacífica doctrina jurisprudencial determinan que en el caso de sanciones disciplinarias no cabe acentuar el interés privado sobre el público, ya que el interés general aconseja que las sanciones disciplinarias sean ejecutadas sobre el interés particular del futbolista o del club en el que juega.

El juicio de ponderación entre los intereses particulares del sancionado y el interés general, que ha de conducir a la protección del interés prevalente, según constante opinión del Tribunal Supremo (sentencia de 16 de Abril de 1996, que cita otras muchas resoluciones anteriores) en armonización de la efectividad de la tutela judicial y la eficacia administrativa, ha de considerar con especial cuidado si el perjuicio del interés general que se derivaría de la suspensión presenta una intensidad particular o requiere una particular protección en el caso concreto, que se encuentre debidamente acreditada mediante los elementos de hecho aportados al proceso, sin por ello prejuzgar sobre la resolución de fondo.

En todo caso, y analizando la incidencia que la medida cautelar solicitada tendría respecto a la efectividad del fallo que en su día pudiese recaer en el procedimiento principal, cabe destacar que si bien es cierto que la inmediata ejecución de la sanción, podría generar perjuicios a los recurrente, ha de entenderse como interés preponderante la ejecución de la sanción ya que el eventual cumplimiento tardío de la sanción produciría una quiebra del interés público en que las sanciones impuestas se cumplan y generaría una sensación pública de impunidad de las conductas sancionadas, y habría conseguido la ineficacia de la sanción

impuesta, y consiguientemente también de la sentencia, por vía de la medida cautelar ahora solicitada.

De modo que de accederse a la suspensión cautelar solicitada el interés público subyacente a toda sanción disciplinaria se vería afectado, pues se disiparía el efecto ejemplarizante y disuasivo que se persigue con este tipo de sanciones.

Es por ello que frente a los intereses generales reseñados no puede prevalecer el interés particular del recurrente o de su club deportivo, máxime si tomamos en consideración que parte de las consecuencias negativas invocadas serían susceptibles de ser resarcidas, en gran medida, mediante la correspondiente compensación económica por los perjuicios que la obligada paralización en su actividad profesional le hubiesen podido ocasionar.

De forma que el *periculum in mora* alegado por el recurrente no justifica la suspensión cautelar solicitada».

Fundamento estos que, a juicio de este Tribunal, resultan ser plenamente coincidentes con las circunstancias que concurren en el presente caso y, por tanto, le deben ser de aplicación. Y ello teniendo en cuenta, además, que la discrepancia entre las resoluciones judiciales vistas, confirman que no existe un criterio jurisprudencial invocable que resulte contrario ni desvirtúe dicha decisión acordada.

Esto nos lleva al examen de la concurrencia de una apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*) que pudiera justificar la adopción de la medida cautelar solicitada en los términos expuestos por el recurrente que, como se ha expuesto, alega que concurre «(...) Un aparente buen derecho (*fumus boni iuris*), a la vista del acta arbitral y de las imágenes y prueba videográfica,, no deja lugar a dudas en cuanto concurre un error material manifiesto en el acta arbitral».

Pues bien, debe recordarse aquí que la jurisprudencia del Tribunal Supremo,

«(...) admite el criterio de apariencia de buen derecho, entre otros, en supuestos de nulidad de pleno derecho, siempre que sea manifiesta; de actos dictados en cumplimiento o ejecución de una disposición general declarada nula; de existencia de una sentencia que anula el acto en una anterior instancia aunque no sea firme; de existencia de un criterio reiterado de la jurisprudencia frente al que la Administración opone una resistencia contumaz o, de modo muy excepcional, de prosperabilidad ostensible de la demanda. (...) En efecto, nuestra jurisprudencia advierte (...) que “la doctrina de la apariencia de buen derecho, tan difundida, cuan necesitada de prudente aplicación, debe ser tenida en cuenta al solicitarse la nulidad de un acto dictado en cumplimiento o ejecución de una norma o disposición general, declarada previamente nula de pleno derecho o bien cuando se impugna un acto idéntico a otro que ya fue anulado jurisdiccionalmente, pero no al predicarse la nulidad de un acto, en virtud de causas que han de ser, por primera vez, objeto de valoración y decisión en el proceso principal, pues de lo contrario se prejuzgaría la cuestión de fondo, de manera que por amparar el derecho a una efectiva tutela judicial se vulneraría otro derecho, también fundamental y recogido en el propio artículo 24 de la Constitución, cual es el derecho al proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba, porque el incidente de suspensión no es trámite idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito”.

En definitiva, no es la pieza de suspensión el lugar indicado para enjuiciar de manera definitiva la legalidad de la actuación administrativa impugnada. Ahora bien, la doctrina de que se trata permite valorar la existencia del derecho con carácter provisional, dentro del limitado ámbito que incumbe a los incidentes de esta naturaleza, y sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, a los meros fines de la tutela cautelar.

Y es que existen supuestos singulares en los que la apariencia de buen derecho, dentro de los límites en que cabe realizar en la pieza de medidas cautelares, se impone con tal intensidad que si con carácter general la pérdida de la finalidad legítima del recurso es el elemento central de la decisión cautelar, debe ponderarse el posible resultado del asunto principal y el desvalor



que representa desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva la ejecución del acto administrativo impugnado» (STS de 24 de marzo de 2017, FD.4).

Lo que viene a confirmar el criterio jurisprudencial reiterado de que sólo en «presencia de una “fuerte presunción” o “manifiesta fundamentación” de ilegalidad de la actividad frente a la que se solicita la medida cautelar, se concede ésta analizando sólo el aspecto del “fumus boni iuris”, sin entrar en el examen de un perjuicio grave irreparable» (SSTS de 7 de abril, 10 de junio y 24 de noviembre de 2004; y de 19 de octubre de 2005).

Esta apariencia así descrita, en fin, es la exigida para poder proceder a la apreciación de la concurrencia del requisito del *fumus boni iuris* y, desde luego, no concurre en la presente situación, a la vista de las alegaciones del recurrente y una vez analizada detenidamente la prueba videográfica aportada. Todo ello, claro está, sin que se prejuzgue el sentido de la resolución que en su momento se dicte, partiendo de que estamos en el ámbito cautelar y, por tanto, está vedado ahora entrar a conocer sobre el fondo del asunto, constituido por las diversas perspectivas subjetivas que defiende el recurrente en su disconformidad frente al acto recurrido y de ahí que no se vayan a resolver dentro de esta pieza de suspensión.

Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en el 30 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre disciplina deportiva y, por aplicación supletoria, en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Y teniendo por atendidas las circunstancias que deben valorarse en este tipo de solicitudes de medidas cautelares, así como el principio *pro competitione*, este Tribunal considera que no procede estimar la solicitud de suspensión cautelar.



Por lo expuesto, este Tribunal Administrativo del Deporte

ACUERDA

DENEGAR la solicitud de medida cautelar de suspensión formulada por D. XXX en nombre y representación del XXX frente a la Resolución del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol de 16 de mayo de 2025, que ratificó la Resolución del Comité de Disciplina de 13 de mayo de 2025 que sancionó al jugador D. XXX por un periodo de 2 partidos por la comisión de la infracción del artículo 130.2 del Código Disciplinario (violencia en el juego), y con multa accesoria en la cuantía de 1.000 €, en aplicación al artículo 52 del mismo Código.

La presente resolución es definitiva en vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Madrid, en el plazo de dos meses desde su notificación.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO